



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

2

Una criminalidad fuera de control

Político

4

Peces fuera del agua

Económico

6

El incremento del salario mínimo

Social

8

Muertes sospechosas

Social

10

La municipalidad de San Salvador en aprietos

Comentario

13

Vida de los pobres, justicia, Jesús de Nazaret

Reporte IDHUCA

15

La "ruta crítica" de la salud

Una criminalidad fuera de control

Los niveles de criminalidad existentes en El Salvador son en verdad alarmantes. Prácticamente, desde el fin de la guerra civil el país no ha conocido un momento de paz social. Al contrario, la violencia social, acompañada de vez en cuando de violencia política, ha sido una constante en los últimos 14 años. Lo grave no es sólo que esa violencia social se ha mantenido como una constante de la historia salvadoreña reciente o que se haya complejizado en sus manifestaciones, sino que, a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, se ha convertido en algo cada vez más incontrolable. La criminalidad, con la particular complejidad que la caracteriza, es uno de los focos de violencia que se encuentra fuera de todo control. Tanto es así que el mundo del crimen tiene al país al borde de la ruptura territorial, legal, institucional y económica.

Otra territorialidad se está configurando en El Salvador: la de los territorios controlados por bandas del crimen organizado que ejercen en ellos su propia autoridad, al margen y en contra de las autoridades oficialmente constituidas. En esa otra territorialidad impera otra "legalidad": la impuesta por las bandas del crimen organizado erigidas, de facto, en sus guardianas. Junto con esa otra "legalidad" se está configurando también otra institucionalidad, cuya normatividad es resguardada por los capos del crimen organizado y sus secuaces. Finalmente, en esos otros territorios están vigentes otras relaciones económicas, establecidas según la conveniencia de los grupos criminales que los controlan. En esa otra territorialidad lo que impera es el chantaje, la extorsión, las amenazas y el miedo. Asimismo, a medida que la nueva territorialidad se extiende, en esa medida se extienden por el país el chantaje, la extorsión, las amenazas y el miedo.

Si se presta atención a las noticias sobre la violencia, una de las cosas más llamativas en todo lo que se dice sobre la misma es el progresivo control de nuevas zonas del país, por parte de bandas de criminales. En la última semana, por ejemplo, ha salido a luz cómo la ciudad de San Miguel está siendo integrada a la territorialidad del crimen. Lo que sucede en San Miguel —y tiene en zozobra a sus habitantes— sucedió hace ratos en distintas zonas de San Salvador, al punto que para nadie constituye noticia importante que, en esas zonas, la autoridad sea ejercida por las bandas criminales que las han convertido en su territorio exclusivo. Son ellas las que controlan sus accesos, regulan las relaciones entre sus habitantes y fijan los impuestos en concepto de pago de seguridad.

Se trata, como se puede ver, de un grave problema para la sociedad salvadoreña en su conjunto. Ante él, aunque quizás sin entender bien de qué se trata, se han planteado algunas propuestas de solución, algunas de ellas francamente absurdas. La más aberrante por sus implicaciones políticas —las cuales sin duda no son ajenas a quienes promueven la iniciativa— es la propuesta de creación de una ley antiterrorista. Se pueden hacer varias objeciones a esta propuesta, pero hay dos que son ineludibles: en primer lugar, en ella no se define en lo absoluto lo que es el terrorismo, con lo cual, en segundo lugar, se termina por confundir y mezclar cosas que deben ser

deslindadas con la mayor nitidez posible. Junto a esta iniciativa, hay quienes han propuesto —según ellos como un paso decisivo para combatir el crimen— implantar un estado (o régimen) de excepción.

Al revisar la Constitución política, en el apartado correspondiente, se cae en la cuenta de lo descabellado de la idea. Porque, en efecto, lo que se suspende con un decreto de régimen de excepción son las garantías constitucionales contempladas en los artículos 5 (sobre la libertad de movimiento y libre elección del lugar de residencia); 6, inciso primero (de difusión y libre expresión del pensamiento); 7, inciso primero (de libre asociación); y 24 (de la inviolabilidad de la correspondencia). Adicionalmente, si así lo decide la Asamblea Legislativa, se pueden suspender las garantías contempladas en los artículos 12, inciso segundo (sobre el derecho a la información y la asistencia de un abogado para una persona detenida); y 13, inciso segundo (sobre el plazo de 72 horas para la detención administrativa). No se ve cómo, con la suspensión de esas garantías constitucionales, se vaya a combatir una criminalidad que controla unos territorios determinados, a plena luz del día y muchas veces con la complicidad de sectores vinculados a la estructura del Estado. En esos otros territorios, controlados por el crimen organizado y las pandillas, ya existe un régimen de excepción, en el cual derechos fundamentales de los ciudadanos han sido anulados por la “legalidad” impuesta por los criminales.

Además de las dos propuestas anteriores —sin duda, de graves consecuencias sociales y políticas— se han ventilado otras dos hasta cierto punto risibles. La primera recomienda eliminar los vidrios polarizados de los vehículos; y la segunda, ubicar retenes en todas las carreteras del país, de modo que los vehículos que circulan por el territorio nacional sean revisados permanentemente por la policía. Estas dos sugerencias parten de un doble supuesto, para el cual no hay evidencias suficientes, que consiste, primero, en creer que los vehículos son un instrumento (o en medio) fundamental de la criminalidad que actualmente impera el país; y segundo, que los criminales se desplazan permanentemente de un lugar a otro, por lo cual de lo que se trataría es de atraparlos en el camino. La tesis de la territorialidad del crimen —que quizás haya que tomarse en serio— pone serios reparos a ese supuesto.

Antes de estar pensando en una ley antiterrorista, en implantar un régimen de excepción, en despolarizar los vehículos o en poner retenes en las calles, habría que hacer una seria reflexión acerca de cómo el crimen organizado y su vinculación con las pandillas (maras) se expandió por desidia de las autoridades; habría que discutir a fondo por qué la territorialización del crimen no ha podido ser detenida, pese a lo obvio de su desarrollo; en fin, habría que abordar con responsabilidad el tema de la violencia como negocio (para las compañías privadas de seguridad y para los comerciantes de armas) y como factor de legitimidad política (para los afanes autoritarios de ARENA). Todos estos son asuntos pendientes en el debate público sobre la violencia y el crimen. Son asuntos que no deben ser dejados de lado por los ciudadanos.

Peces fuera del agua

Más que renovar sus aguas, el río del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se vuelve turbulento tras cada periodo post electoral. Desde los años 90, este instituto político se ha distinguido por hacer de las disputas internas su rostro visible ante la opinión pública. El centro de la pugna, de nuevo, es el liderazgo formal del partido y la asignación de puestos claves dentro de su estructura.

Esta vez, se suma un nuevo actor a la triste escena. Juan Pablo Durán, diputado por el Departamento de La Paz y jefe de la fracción legislativa hasta el pasado 26 de julio, enfrenta un juicio en su contra tras ser destituido de su cargo. Según sus detractores, Durán habría cometido algunas irregularidades administrativas durante el tiempo en que fungió como jefe de los democristianos: contratación innecesaria de personal, creación de plazas laborales fantasmas y acoso sexual hacia algunas empleadas. De comprobarse estos hechos, los cuales ameritan un proceso de investigación serio, este diputado deberá asumir sus responsabilidades, con lo cual —de confirmarse las acusaciones— quedaría demostrado que, lamentablemente, la corrupción sigue siendo una práctica habitual en ese partido. Si no se comprobara nada, quedaría una muestra más de la bajeza de la clase política salvadoreña. A estas anomalías también se suma la agresión física de Durán en contra del gerente general del PDC, antes del inicio de una convención departamental. Por tanto, su futuro dentro del partido depende ahora del veredicto de un Tribunal de Honor interno.

Sin embargo, estas acusaciones han sido desestimadas por el aún diputado, quien señala a Rodolfo Parker, actual secretario general pedecista, como artífice de la “movida política”. Así, Durán considera que su destitución se debe a diferencias personales entre ambos, a su negativa a votar por la aprobación de las reformas a la Ley Penitenciaria y a su ausencia del debate en torno al reciente envío de otro batallón militar a Irak. En otras palabras, Durán no se habría plegado a la línea general del partido, lo cual podría significar su salida de la

pecera. Asimismo, para defenderse de los ataques, otro argumento esgrimido por este último es que Parker está acercando al PDC a la extrema derecha, por lo cual lo que se busca es aislar a quienes se resisten a ese acercamiento. Todos estos hechos se dan a tres meses de que el partido celebre elecciones primarias para nombrar a un nuevo secretario general.

A propósito de estas disputas, es necesario hacer algunas valoraciones sobre los intereses en juego y las oportunidades abiertas para que viejos actores busquen beneficiarse dentro del PDC.

Limpiando la pecera

Como cortina de humo, las diferencias internas, según sus miembros, se originan por el pobre desempeño del partido en los procesos electorales de este año. No obstante, de acuerdo con los resultados de los pasados comicios, el PDC obtuvo dos diputados más que en 2003 y ganó 14 alcaldías, igual número que el obtenido en aquel año, cuando, si bien consiguió cuatro más, estas fueron ganadas en coalición con otros partidos. Las disputas, pues, no se originan por este motivo, dejando a la vista más bien que la pugna se debe, como siempre, a los juegos de poder entre algunos dirigentes.

Sin necesidad de hacer un agudo análisis, lo primero que salta a la vista es que las constantes disputas impiden que este partido tenga un planteamiento ideológico coherente y cohesionado, que le permitiría mayor protagonismo dentro de la vida política del país. En contraste, como el resto de los partidos políticos salvadoreños, el PDC ha optado por un pragmatismo político a ultranza. Por otro lado, este nuevo capítulo de conflictos deja claro que la institucionalidad de los partidos vale poco o nada con tal de que algunas figuras, en nombre de sus seguidores, busquen hacerse del poder sin importar los medios empleados. Al respecto, Rodolfo Parker ha insistido ante la prensa que los enfrentamientos entre Durán y el partido no son un “conflicto político”.

Sin embargo, los hechos dicen lo contrario.

En este caso, Parker, en su calidad de secretario general, ha hecho uso de su influencia en el partido para remover a Durán de un puesto clave con el apoyo de sus seguidores. Es obvio que al líder pedecista y su grupo no les conviene contar con un jefe de bancada que piense —y vote, sobre todo— distinto al resto de la fracción. Así, la fragilidad (o la inexistencia) de los procesos democráticos internos de los partidos queda expuesta una vez más.

En ese sentido, si los legítimos canales de representación de intereses —es decir los partidos políticos— adolecen de prácticas poco democráticas, no se puede esperar que la sociedad salvadoreña avance por el camino de la democratización. Al contrario, este tipo de prácticas erosiona la credibilidad de los institutos políticos y pone en discusión el tema de si los diputados responden al partido al que pertenecen o a los electores que le dieron su voto de confianza. Al parecer, para Parker y compañía, la disciplina partidaria en materia del apoyo legislativo debe primar sobre la conciencia individual de los diputados de su partido. Siguiendo esta lógica, el actual secretario general no sólo asegura su acercamiento a ARENA sino, además, su apego al poder desde su cargo.

De estas disputas también se desprenden otros hechos igualmente lamentables. En primer lugar, la nula disposición de parte de los miembros del partido por resolver sus diferencias a través del diálogo honesto y no a través de escaramuzas entre unos y otros. Aunque es necesario reconocer que cambiar esa forma de ser sería pedirle demasiado a la llamada “clase política”.

En segundo término, las diferencias constatan que los políticos nacionales forman parte de los partidos sólo para buscar el beneficio propio, ya sea en términos de poder o de ingresos económicos. Y es que la historia del PDC ha estado llena de rupturas e inconformismos, de manera usual, entre dos bloques que difieren no en el rumbo del partido, sino en la asignación y apropiación de poder dentro de su estructura.

En tercer lugar, los choques verbales entre Durán y Parker han presentado la coyuntura ideal para el resurgimiento de otras figuras ansiosas por volver a detentar cuotas de poder.

No es de extrañar, pues, que a raíz de este conflicto, Ronald Umaña, ex secretario general del partido, y alguna vez abanderado de la “nueva clase política”, que se gestó a mitad de los años noventa —y que sumió al partido en una crisis institucional sin precedentes— quiera ahora ganar protagonismo ante la opinión pública.

Según Umaña, Parker ha replegado al PDC hacia el bloque de derecha, lo cual va en contra de los principios doctrinarios del partido. Su exagerado intento por figurar ha llegado al límite de montar, según él, una estructura partidista paralela en algunas zonas del oriente del país, con el objetivo de implementar la “Cruzada de Rescate del PDC-José Napoleón Duarte”.

Con esta táctica, Umaña pretende hacerle creer a la población en general, y a los pedecistas en particular, que su figura y propuesta encarnan los verdaderos valores social demócratas. Sin embargo, no está de más recordar que Umaña fue el principal artífice de los cambios a los estatutos del partido. Entre estos giros, bajo la excusa de representar a una “nueva clase política” y a un cambio generacional, Umaña y sus seguidores eliminaron cualquier alusión a la socialdemocracia y a los valores del cristianismo en los documentos oficiales del partido. Incluso, consignaron como uno de los objetivos principales del instituto político la promoción de “una auténtica economía de Empresa y Libre Mercado”, tal como lo señala Rubén Zamora en su libro *El Salvador: Heridas que no cierran*.

En suma, pues, este pez fuera del agua cree que con sus rasgaduras de vestido, e intentos por “salvar al partido” de un giro hacia la derecha, logrará apoyo suficiente para ingresar de nuevo y obtener beneficios económicos como en el pasado. Basta con hojear el semanario *Proceso* en ediciones de la época en Umaña irrumpió en la escena política para sospechar de sus buenas intenciones. En definitiva, son muchas las fisuras que muestra la pecera. Asimismo, son varias las grietas que se vislumbran en su interior si continúa en esta dinámica de conflictos por el poder entre sus principales sectores. La pregunta que queda por responder es ¿hasta cuándo la población tolerará a partidos políticos como el PDC?

El incremento del salario mínimo

La semana pasada, el presidente de la República Elías Antonio Saca avaló el incremento del salario mínimo. En junio, durante su discurso de segundo año de gestión presidencial, el mandatario se comprometió a revisar los mínimos salariales de las diferentes ramas de la economía. Así, Saca giró instrucciones al ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, para que se estudiara el tema en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Finalmente, después de varios meses de espera, el Consejo presentó el 16 de agosto los incrementos respectivos, que fueron bien recibidos por el presidente. El Consejo propuso un incremento del 10% en los sectores agrícola, industrial, comercio y servicios. El sector de la industria textil, especialmente la maquila, sólo recibirá un aumento del 4%. El decreto que estipula el aumento entrará en vigencia a partir del primero de septiembre.

La indexación de los salarios ha generado diversas reacciones en la sociedad salvadoreña. Para el partido oficial, el alza salarial, aunque no es suficiente, viene a mitigar la difícil situación económica en la que se encuentran los salvadoreños. Roberto Espinal destaca que el principal logro consiste en proponer un alza salarial con el beneplácito de la empresa privada y el sector laboral. Los partidos de la oposición, especialmente el FMLN y el CD, consideran que el ajuste realizado no está acorde al incremento en el costo de la vida. Para Héctor Dada Hirezi, “el 10 por ciento nos parece absolutamente insuficiente y responde a la política del gobierno de competir a nivel internacional con bajos salarios que, a nuestro juicio, es una política equivocada”. El coordinador de la fracción legislativa del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, señala que los empresarios tienen una visión “meramente competitiva” basada en la remuneración de bajos salarios, y olvidan que un buen salario dinamiza el mercado interno.

En términos generales, distintos sectores de la población salvadoreña consideran que el alza salarial no es suficiente para hacer frente a las necesidades económicas. Es más, existe un

sector de la población, especialmente los trabajadores y trabajadoras de las maquilas, que considera que el leve incremento es una broma de mal gusto de parte del gobierno. Para muchos, esto comprueba, una vez más, que la administración Saca está más preocupada por satisfacer los intereses de los empresarios, antes que las necesidades del sector laboral.

A través de los medios de comunicación, economistas vinculados a instituciones de investigación, gremios empresariales y empresas de renombre en el país, como Luis Membreño, Waldo Jiménez y Alejandro Alle, han expresado su opinión en torno al mencionado aumento. Para Membreño y Jiménez, el incremento salarial no puede ser mayor a la recomendación realizada por el Consejo, pues una remuneración más alta restaría eficiencia a las empresas y aumentaría el nivel de desempleo. Según Alle, seguidor de los economistas ultraliberales Friedrich Hayek y Von Mises, el salario mínimo no permite el libre funcionamiento del mercado; y es que, de acuerdo a su concepción, instituir un salario mínimo genera graves problemas económicos a la sociedad.

La crisis económica de la familia salvadoreña

Los datos más recientes de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) muestran que en junio pasado la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó \$139.9 y \$100.8, en la zona urbana y rural, respectivamente. Con el nuevo incremento salarial, y en el supuesto de que la CBA se mantenga constante hasta fines del año —poco realista, pero necesario para analizar el incremento—, los salvadoreños remunerados con el salario mínimo y ubicados en el sector formal únicamente podrán satisfacer su alimentación y difícilmente harán frente a otras necesidades. A partir del primero de septiembre, el nuevo salario mínimo promedio en la zona urbana —considerando los cambios en los sectores comercio, servicios, industria y maquila— será de \$167.25. En la ciudad, alrededor del 83% de este monto salarial se gasta en alimentación y el 17% restante —cerca

de \$27— se diluye en el gasto en transporte. En el campo, la situación es más crítica. Con el incremento, el salario agrícola alcanzará \$81.46. Este monto apenas representa el 81.4% de la CBA. O sea que las necesidades de alimentación de las familias del campo no serán satisfechas de manera adecuada.

Un análisis más realista muestra que el nuevo incremento salarial está muy por debajo del costo de la Canasta de Mercado (CM). Mientras que la CBA sólo estima el costo de la alimentación de una familia promedio, la CM considera el gasto en alimentos, transporte, salud, educación, cultura, entre otros. En junio, la CM alcanzó \$675.9. Este monto supera abruptamente los salarios mínimos pagados en todos los sectores de la economía.

Salarios Mínimos

Rubro	Previo a 2003	Alza 2003	Alza 2006
Comercio y Servicios	\$144.00	\$158.40 10%	\$174.24 10%
Industria téxtil y confección (maquila)	\$144.00	\$151.20 5%	\$157.25 4%
Industria	\$144.00	\$154.80 8%	\$170.28 10%
Agricultura	\$74.06	\$74.06 0%	\$81.46 10%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador.

La devoción gubernamental por la clase empresarial

El gobierno y los medios de comunicación afines a los grupos económicos más fuertes del país opinan que el incremento salarial es fruto, al fin de cuentas, de los buenos deseos de los empresarios hacia los trabajadores. Y es que desde la perspectiva oficial, el alza en los salarios, en un contexto de bajo crecimiento económico, reafirma el compromiso de la empresa privada por mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. No obstante, el bajo incremento salarial se debe a que las condiciones principales para realizar el mencionado aumento fueron establecidas por la empresa privada. Para efectuar el alza se tomaron en consideración, en primer lugar, los

índices de producción y de rentabilidad de las empresas y no el incremento en el costo de la vida que afecta al sector laboral.

Para el gobierno es menester no soliviantar a los inversionistas. Al fin de cuentas, según la visión gubernamental, la inversión privada es el motor de la economía que conduce al desarrollo. Por ello, no es conveniente establecer un aumento de salarios que afecte directamente la rentabilidad de las empresas; si esto sucede, la inversión local y extranjera buscará otras tierras y en el país reinará el desempleo. De acá se desprende que la labor del gobierno es “consentir” a los empresarios, aunque eso genere malestar en la sociedad salvadoreña. Un vistazo a las últimas decisiones gubernamentales muestra que el gobierno permite el incremento de las tarifas de la energía eléctrica, el alza del pasaje de transporte y la alta rentabilidad de las empresas petroleras. Sin embargo, no está totalmente dispuesto a un incremento salarial que corresponda a la realidad que enfrentan los trabajadores.

Aquellas medidas son permitidas por el gobierno para que las empresas continúen operando en condiciones en las cuales los costes están aumentando constantemente. De esta manera, el gobierno facilita que los empresarios aseguren unos elevados niveles de rentabilidad empresarial. Sucede lo contrario con los trabajadores. Cuando estos demandan un aumento salarial, debido a que el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo es muy alto, el gobierno estipula un nuevo mínimo salarial que apenas es suficiente para la alimentación. El déficit que se genera entre el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y el salario mínimo se concreta en la falta de una vivienda adecuada y unos niveles de salud, educación y cultura sumamente bajos. Cuando estos déficit se generalizan en la mayoría de los ciudadanos se está ante una situación de pobreza. Por ello, no sólo es necesario que existan fuentes de empleo suficientes, sino que las mismas remuneren a los trabajadores y trabajadoras por encima del costo de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, con un salario que les permita tener una vida digna.

Muertes sospechosas

La situación de violencia está adquiriendo rasgos alarmantes desde hace varios meses. En específico, han ocurrido una serie de homicidios con características sumamente intrigantes. “Como consecuencia de las malas políticas de lucha contra la criminalidad, elaboradas a partir de la represión por parte del gobierno, lo que El Salvador enfrenta en la actualidad es una criminalidad más compleja, pero al mismo tiempo más brutal”, explicó Juan José Dalton, el pasado 25 de febrero en el Diario *Co-Latino*. Y es que, con el paso de los días, durante este año, dicho señalamiento ha ido siendo, desgraciadamente, confirmado por la realidad misma. Las autoridades policiales culpan de todo a las pandillas o maras que, según parece, han creado un “gobierno paralelo”, pues controlan territorios “donde deciden y mandan, cobran impuestos a los transportistas, tiendas y negocios, y a los que por ahí transitan; quienes desobedecen pagan con sus vidas. Aquí no manda el Estado ni sus instituciones”, en palabras de Miguel Cruz, especialista en temas de pandillas.

Asimismo, no se puede dejar de mencionar la posible relación que pudiera estarse dando entre criminalidad y el narcotráfico o, como lo han señalado algunos organismos de derechos humanos, con grupos de exterminio, que encuentran en esta situación de impunidad el medio más efectivo para delinquir, sin que haya un sistema de justicia que los frene.

Muertes con saña

El número de crímenes realizados con barbarie ha aumentado. A continuación se presenta una serie de ejemplos que ilustra esta grave situación. Uno de ellos fue el caso de dos jóvenes de Tacuba, Ahuachapán, que llegaron el 8 de agosto a trabajar a una finca de café en San Jacinto. Allí fueron asesinados de la siguiente manera: “a las 4:30 de la madrugada llegaron cinco hombres vestidos

de negro y sus rostros iban cubiertos con gorros pasamontañas. Los extraños tocaron la puerta de la galera donde dormían doce trabajadores de la finca. Al abrir la puerta, los visitantes armados obligaron a los colonos a salir y formarse en fila. Luego dejaron que los ancianos regresaran a la galera y enseguida comenzaron a identificar al resto de trabajadores. A la mayoría de ellos les dijeron que regresaran a la galera, pero antes los golpeaban”, relató *La Prensa Gráfica*. Esaú García, de 18 años, y Pablo Jiménez, de 25, fueron llevados detrás de la galera, donde les asestaron varios balazos con escopeta, causándoles, además, múltiples lesiones con corvo.

Otro caso ocurrió en Jayaque, en La Libertad, donde tres parejas fueron asesinadas en una misma vivienda. Los tres hombres y las tres mujeres fueron encontrados boca abajo y con lesiones de bala en la cabeza. Según fuentes policiales, los asesinos iban cubiertos con gorros pasamontañas y vestidos de negro, de la misma forma que los homicidas de los jóvenes de Tacuba. Muchos elementos sobre los móviles del crimen estaban ocultos, pero dos, al menos no. Primero: “el crimen estaba planificado”, tal como lo dijo con contundencia el subdirector de investigaciones de la Policía, Héctor Mendoza; segundo, “las víctimas fueron ejecutadas”, aseguró la fiscal Ada Villalta. Dentro de la vivienda había tres menores de edad, que permanecieron encerrados en un cuarto por más de cinco horas. Una niña de once relató que “pusieron a mi mamá y a todos en el suelo y sólo los mataron. No salíamos de la casa, porque creíamos que nos matarían”.

Este hecho forma parte de una serie de asesinatos múltiples o “masacres” como los denomina la prensa escrita, que informó sobre otras tres: la primera ocurrió en Zacatecoluca, departamento de La Paz, el pasado 23 de enero, cuando, según fuentes policiales,

murieron cinco futbolistas, un aficionado y un pandillero a manos de un grupo de mareros; la segunda ocurrió el 15 de mayo en Santa Ana, cuando fueron asesinados a balazos y con un machete una pareja y sus tres hijos menores de edad, entre los cuales había un niño de cuarenta días de nacido; la tercera fue en Antigua Cuscatlán, el pasado 2 de junio, cuando tres menores y una mujer embarazada murieron tras haber recibido múltiples impactos de bala, cuyos responsables fueron sujetos desconocidos que llegaron al lugar con armas de grueso calibre al negocio de las víctimas.

En estos casos, tanto la Policía como la Fiscalía no dudaron en decantar sus sospechas hacia las pandillas. En lo absoluto, ni la PNC ni la Fiscalía han asumido la posibilidad, señalada por algunas organizaciones sociales, de la existencia de grupos de exterminio al estilo “escuadrones de la muerte”, semejantes a los que funcionaron durante y después del conflicto armado y que, según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, eran liderados por figuras como Roberto D’Aubuisson, fundador del partido ARENA.

Más recientemente, el pasado miércoles 16, fueron encontrados cuatro cadáveres dentro de un vehículo que había sido robado a una joven en la zona del estadio Cuscatlán. Dos de ellos estaban cubiertos en bolsas plásticas negras y dos en sacos de nailon. Tenían lesiones con armas de fuego y de arma blanca. Cabe la probabilidad de que, antes de ser asesinadas, las víctimas hayan sido torturadas. De hecho, uno de los cuerpos tenía desfigurado el rostro, pues al parecer “había sido golpeado con una piedra en repetidas ocasiones”, describió una nota de *El Diario de Hoy*.

Sin investigación profesional

Las dudas sobre quiénes están detrás de este tipo de hechos y cuáles son las razones para realizarlos quedan sin respuesta la mayoría de las veces. Algunas tesis que se manejan atribuyen los crímenes a las pandillas,

al narcotráfico, y hasta al reaparecimiento de grupos de exterminio al estilo de los escuadrones de la muerte. Esto quiere decir que los crímenes pueden estar relacionados a venganzas personales, ajusticiamientos por droga o, inclusive, por motivos políticos.

El mismo presidente Saca ha aceptado que “lo que estamos viendo es a las pandillas cometiendo asesinatos, primero muerte entre ellos, pero estamos observando que reciben órdenes de grupos oscuros que estamos tratando de determinar” (*Diario Co-Latino*, 27.07.06). En ese mismo sentido, Benito Lara, diputado del FMLN, afirmó que “los asesinatos que se han estado registrando son atribuidos a las maras, pero no se investigan y nosotros necesitamos saber la verdad de los hechos, porque si no, esto irá en una situación que se hará incontrolable” (*Diario Co-Latino*, 22.07.06). La problemática no se reduce, como algunos funcionarios gubernamentales plantean, a las pandillas, sino que va más allá de cómo se ha entendido su accionar en el pasado. Es decir, como lo ha señalado Miguel Cruz en más de una oportunidad, las maras han evolucionado. Por ello, a Saca no le queda más que extender el análisis: “el narcotráfico provoca estos desórdenes y asesinatos para distraer a la gente, mientras ellos pueden realizar otro tipo de actividades, estamos siguiendo la investigación, pero aquí sí hay sicariatos, gente contratada para matar, y estamos tras de ellos” aseguró.

Con todo, por más que Saca asegure que se investiga y que “la policía está haciendo una labor que, además de los operativos de contundencia, va más allá y es que estamos llegando a la investigación policial”, lo cierto es que las instituciones del Estado encargadas de investigar crímenes como los reseñados son incapaces de hacerlo con eficacia. En los ejemplos antes señalados, la Fiscalía, la PNC y Medicina Legal recogen los cadáveres y algunas evidencias, pero no se pasa de ahí. Las víctimas y sus familiares se quedan a la espera de una justicia que no llega. Mientras tanto, la impunidad sigue permitiendo a los criminales seguir realizando sus fechorías.

La municipalidad de San Salvador en aprietos

La actual administración municipal de San Salvador ha estado bajo el ojo crítico de diversos sectores nacionales, prácticamente desde que iniciara su gestión el 1° mayo pasado. Las autoridades municipales, a la cabeza de Violeta Menjivar, denuncian que la comuna está siendo objeto de una intensa campaña que persigue desprestigiar su gestión, lo cual era de esperarse tras el cierre de unas elecciones que dieron a Menjivar una victoria muy cerrada sobre su contrincante arenero, Rodrigo Samayoa, quien desde su puesto como coordinador departamental de su partido es uno de los más críticos de la gestión efemelenista en la capital.

Pero, a parte de la existencia de esa campaña, la comuna capitalina enfrenta otras cuestiones internas que deberá resolver en el menor tiempo posible, para poder enfrentar los compromisos cuyo cumplimiento será el rasero con el que, en último término, se medirá el éxito de su gestión. Hay que esclarecer, pues, en primer lugar, la campaña de la que está siendo objeto la municipalidad de San Salvador, identificando los responsables de la misma y sus argumentos. Luego, habría que señalar al menos dos situaciones internas que inciden directamente en la imagen institucional que proyecta la comuna: una de orden laboral, que tiene que ver con el sindicato de trabajadores municipales, y otra de orden político, respecto de la conformación del concejo municipal y la colocación de los llamados puestos de confianza. Ambas situaciones se confunden cuando se mezcla lo político con lo laboral, por ejemplo, cuando se ha procedido al despido de personas que no gozan de la confianza “política” de las actuales autoridades.

Finalmente, hay que anotar que los aprietos que atraviesa actualmente la cuarta administración efemelenista en San Salvador

no deberían ser obstáculo para lograr avances significativos en los ingentes retos que enfrenta la capital, entre los que destacan, por su urgencia, el problema de la basura, el reordenamiento del centro histórico, la recuperación de las llamadas áreas críticas o de alto riesgo y la reestructuración del obsoleto sistema de drenajes.

Una campaña de desprestigio

La municipalidad de San Salvador y la compañía que maneja el relleno sanitario de Nejapa se han enfrascado en una intensa pugna durante las últimas semanas, debido a supuestos incumplimientos financieros por parte de ambas entidades. Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), compañía que administra el relleno, acusa a la alcaldía capitalina de incumplir el pago por el arrendamiento de sus camiones recolectores de basura que han prestado servicio desde que hace dos meses la capital se encontrara en crisis por la acumulación de desechos sólidos. La comuna, por su parte, reclama a MIDES la cancelación de un monto adeudado por cobros indebidos.

La pugna se da luego de que la alcaldía se hallara en la crítica de los medios de derecha por la incapacidad de la primera para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en la capital, a escasos días de haber asumido el gobierno municipal de San Salvador. Aquellos medios no se guardaron toda clase de argumentos para poner de relieve los problemas por los que atravesó la alcaldía. Sin embargo, el problema con MIDES, quien ahora es presidida por un militar retirado, no es el único.

Semanas antes, esos mismos medios informativos habían introducido en el debate público otro escollo que involucraba a la municipalidad capitalina. De acuerdo a la

prensa, la alcaldía se había negado a pagar a una asociación de abogados el alquiler de un local propiedad de estos últimos, mismo en el que se había instalado una oficina municipal. La mayoría de notas, claramente acusatorias hacia la alcaldía, sobredimensionaban una situación hasta cierto punto normal en cualquier contrato de arrendamiento: la alcaldía no pagaría sus cuentas hasta que se resolviera la identidad del otro contratante, pues había funcionando dos asociaciones de abogados con sus respectivas directivas que reclamaban el nombre de la asociación. Evidentemente se trataba de una situación contractual incómoda para unos y otros, pero los medios pudieron haber esperado para que las cosas se resolvieran. Sin embargo, pudo más el afán de desprestigiar la gestión municipal capitalina.

Días atrás, también los medios de prensa hablaban de una situación incómoda entre el gremio de los grandes empresarios y la comuna capitalina, ante la intención de esta última de cobrar una especie de tasa municipal a las vallas y anuncios publicitarias que proliferan por la ciudad. Lo que más destacó la prensa fue el descontento de los empresarios, añadiendo más elementos de inconformidad ante la administración municipal capitalina.

Pero los directivos de MIDES, la indefinida asociación de abogados, los medios de comunicación de derecha ni el gremio de los grandes empresarios han sido los únicos en sumarse a la referida campaña. En cuanto oportunidad se les ha presentado, se ha escuchado a funcionarios del Ejecutivo emprenderla en contra de la alcaldesa y su concejo. Para el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, el retraso de las obras de mitigación que se realizan en la capital no son de su responsabilidad, sino de la alcaldía por no recolectar la basura que, arrastrada por las lluvias, van a parar a las obras inconclusas, teniendo que invertir tiempo en limpiarlas. Se trata, a todas luces, de un argumento absurdo que quiere encubrir la incapacidad de dicha cartera de Estado en

cumplir sus plazos. El presidente Saca también se ha aprovechado de la coyuntura desfavorable para la alcaldía en cuanto el tema de la basura para presentarse como el salvador de los capitalinos.

Así pues, se puede hablar de una auténtica campaña de desprestigio en contra de la gestión municipal capitalina, misma que envía un mensaje que Violeta Menjívar y su concejo debieron entender desde un principio y tomar las medidas necesarias: la derecha aglutinada en el partido ARENA, los medios de comunicación afines, el Ejecutivo y la gran empresa privada harán todo lo posible por dejar mal parada a la administración del FMLN en la capital. En cierto modo, ARENA ya piensa en las elecciones de 2009, cuando seguramente querrá hacerse del gobierno municipal de San Salvador. Con todo, hay que decir que la intensa campaña de la que está siendo objeto la administración edilicia capitalina no le exime de ciertas situaciones internas en las que debiera mostrar mayor astucia política, sobre todo cuando aquellas se revierten en escasos logros.

Algunos problemas internos

La prensa de derecha también ha puesto de relieve el conflicto entre el sindicato de trabajadores de la alcaldía capitalina y las autoridades municipales. Los primeros reclaman últimamente por el despido supuestamente injustificado de los trabajadores; mientras tanto, las autoridades dicen tener los argumentos suficientes como para justificar los despidos, entre los que destaca la sobresaturación de empleados. Sin embargo, cabe la duda sobre las verdaderas intenciones del referido sindicato, pues curiosamente sus requerimientos y quejas aumentan en el marco de coyunturas delicadas para las autoridades, tales como la actual. Cabe la duda, pues, sin pretender descalificar las reivindicaciones laborales, los sindicalistas han mostrado cercanía a los responsables políticos de la campaña de desprestigio de la que se ha hablado arriba. En otras palabras, los sindicalistas tendrían que mostrar la

autenticidad de sus reivindicaciones. Con todo, el conflicto laboral —con claros tintes políticos— amenaza con deteriorar más la imagen de la actual administración municipal en San Salvador.

En segundo lugar, hay que hacer referencia a otro punto, esta vez estrictamente político. Y es que uno de los problemas más graves de la anterior gestión efemelenista en la capital fue, sin duda, las pugnas al interior del concejo municipal. Cuando Carlos Rivas Zamora, antecesor de Violeta Menjívar, dejó su cargo, al interior del concejo habían tres candidatos enfrentados: el alcalde saliente, que buscaba su reelección apoyado por una coalición de partido; Menjívar, que se presentaba como la candidata oficial del FMLN; y el pedecista Rodrigo Contreras Teos, quien además de haber integrado el concejo municipal saliente representa hoy un gremio de transportistas. Las tres candidaturas reflejaban la disparidad de intereses en el seno del concejo.

Hoy la situación es otra. Tal como se han manejado las cosas a nivel interno, la conformación del actual concejo capitalino ha pasado por el filtro político. Con toda seguridad y naturalidad el partido quiere garantizar fidelidad política en una administración caracterizada por el abandono de las filas por parte de miembros del más alto nivel. Los antecesores de Menjívar han abandonado escandalosamente las filas efemelenitas. Rivas Zamora se fue apoyado por el FDR, la última escisión del FMLN, y Héctor Silva, alcalde entre 1997 y 2003, salió del partido para unirse a las filas del extinto CDU, hoy CD.

Que el actual concejo capitalino sea casi monolítico en cuanto a lo político e ideológico —hasta donde se maneja en la opinión pública— no es en sí pernicioso, si la alcaldía cumpliera cabalmente con sus compromisos frente a la ciudadanía; podría tratarse, es bastante probable, de una respuesta frente a la situación de anarquía que se respiró al

término de la administración saliente. Sin embargo, leída en clave democrática, la conformación del nuevo concejo capitalino podría ser criticada como un retroceso, pues contradice los avances en cuanto a la pluralidad logrados en las administraciones anteriores, sobre todo cuando estos fueron presentados como estandarte. Cual péndulo, se habría transitado tajantemente de una situación de anarquía a una casi absolutista: el control político del partido comunista en el seno del concejo capitalino. Ahora bien, ¿cómo repercute esto en la labor municipal y el cumplimiento de acciones concretas? La respuesta conduce a señalar los desafíos más significativos de la municipalidad y a exigir resultados más satisfactorios.

Desafíos ingentes

Quizás los mayores retos del actual concejo capitalino, se ha dicho líneas arriba, tienen que ver con el manejo de la basura, el reordenamiento del centro histórico de San Salvador, la recuperación de las zonas de alto riesgo y la reestructuración del drenaje de la ciudad. Se trata de situaciones indudablemente muy complejas, que requieren una enorme dosis de voluntad política, pero, además, de una gran capacidad financiera y del establecimiento de entendimientos con otros sectores nacionales, mismos que se echan de menos en estos primeros meses de gestión. Baste los casos de la basura y del drenaje que, lejos de encontrar entendimientos y alianzas estratégicas, ha enfrentado a la municipalidad con otras instituciones. Lamentablemente el criterio político ha primado sobre el trabajo serio y los resultados concretos: por un lado, la asechanza de una derecha dolida por haber perdido otra oportunidad de hacerse del gobierno de la capital; por otro, la pérdida —ojalá recuperable— de tiempo vital en la consolidación de un equipo municipal fiel a la dirigencia partidaria efemelenista.

“Vida de los pobres, justicia, Jesús de Nazaret”

“Dios, unión, libertad” son bellas palabras que asociamos a la independencia de El Salvador desde hace casi dos siglos. “Democracia y libertad” son también bellas palabras que hoy debieran dirigir la vida de los salvadoreños. Pero nadie cree en ellas. Las primeras las desmitificó Rutilio Grande en su famosa homilía del Divino Salvador en 1970. Las segundas, sobre todo en boca de George Bush, se desprestigian por sí solas.

Y sin embargo, es importante poner en palabra lo que puede dirigir el camino humano de los pueblos. Para hoy proponemos las siguientes: “Vida de los pobres, justicia, Jesús de Nazaret”. Lo hacemos como salvadoreños y específicamente como cristianos ante la V Conferencia de Obispos en Aparecida. Pensamos que por esas cosas tenemos que trabajar en la Iglesia. Nos guían las ideas de Ignacio Ellacuría de hace veinte años y los comentarios actuales de José Comblin.

1. La vida de los pobres

Propiciarla es el núcleo de la opción por los pobres. Seguir repitiéndola sin vivir y desvivirse por ella —y sin arriesgar algo por ello— es palabra rutinaria, sin eficacia.

Empecemos. Los pobres no desaparecen y su futuro es sombrío, si es que los consideramos como seres humanos con dignidad. Lo es, sobre todo, para los campesinos de antes. Vivían en pobreza, pero al moverse a las ciudades tienen que buscar su modo de subsistencia, y muchas veces sin preparación para ello. Lo que les queda, entonces, son trabajos eventuales, informales. Y siempre les queda irse como mojados, lo cual no por sabido —aplaudido incluso por los gobernantes— deja de ser macabro: los que se van —si llegan— pueden comer allí, y desde allí pueden enviar remesas —y los ricos del norte los siguen teniendo a su servicio. Es un reacomodo de la especie humana, se dirá, pero no es crecimiento en familia humana.

El salario mínimo ha cambiado en estos días. En la industria, de 154.80 dólares ha pasado a

170.28; en la maquila, de 151.20 a 157.24; en la agricultura, de 74.06 a 81.46; en comercio y servicios de 158.40 a 174.24. El aumento porcentual en las maquilas es el menor. ¿La razón? Que puedan seguir siendo competitivas y no las trasladen a países donde puedan pagar todavía un menor salario. Crueldad y deshumanización. A los trabajadores se les ignora como seres humanos. Son mano de obra barata —es decir, máquinas rudimentarias— para que funcione la economía. Y a los emigrantes “les es negada la fraternidad, el suelo bajo los pies”, dice Casaldáliga. No se nos cae la cara de vergüenza, porque la vergüenza no existe en el capitalismo. No es un bien social. Razón tiene Pérez Esquivel: “El capitalismo nació sin corazón”.

Estos salvadoreños, desubicados en la ciudad o en un país extranjero, fácilmente pueden perder la cultura que antes tenían, es decir aquello que da a sus vidas identidad y dignidad, formas de convivencia y esperanza. En definitiva, aquello que les hace saberse quiénes son. Se encuentran ahora, aquí o en Estados Unidos, con una cultura mercantilizada. Todo es mercadería, y también lo son los medios, que debieran ser instrumentos de *cultura*, de *comunicación entre los humanos*. Pero en los medios el éxito se mide por la audiencia, y ésta es la que mide las ganancias. Cuando todo esto ocurre, el ser humano deja de serlo, bruscamente o poco a poco.

También para sus hijos, los jóvenes, el futuro es muy sombrío. ¿Qué se les enseña? ¿Pará que se les educa? En lo fundamental, para que tengan una cualificación suficiente que les permita integrarse dentro de esa sociedad mercantilizada. Con sinceridad, con muy pocas excepciones, ¿para qué otra cosa vale la pena formarse y estudiar? Y si aparece en el horizonte social y político, aun con todas sus ambigüedades, alguna lucecita que vaya en sentido contrario a la mercantilización de lo humano y más allá de la deshumanización del dinero, algo que dé sentido al trabajo y a la educación, entonces a los que lo propician se les tilda de “populistas”. Y ya no hace falta argumentar más.

2. La justicia

Todo lo dicho es una injusticia que clama al cielo, y es producto de estructuras, de un sistema capitalista. Y como no lo van a analizar y condenar ni las multinacionales, ni la banca mundial, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, la Iglesia ciertamente debe hacerlo. Pero para ello debe revisar su juicio sobre el mundo; en lenguaje del Nuevo Testamento, sobre “el pecado del mundo”. En concreto, debe revisar la actualidad y la incidencia de su “doctrina social”.

El P. Ives Calvez, jesuítas, estrecho colaborador del Padre Arrupe durante largos años en Roma y experto en estos temas —ayudó a redactar encíclicas papales sobre temas sociales—, en un libro reciente acaba de plantear “los silencios de la doctrina social de la Iglesia”. Y lo primero que dice es que la doctrina social “no cuestiona el sistema”.

Dicho con sencillez, esa doctrina critica los *adjetivos*, un capitalismo *salvaje*, pero no critica al capitalismo como tal. Pues bien, según el capitalismo lo más básico y fundamental es el *derecho de propiedad*, y mientras se mantenga ese principio la economía será estructuralmente fuente de opresión y el ser humano será comprendido desde su derecho a poseer dinero y su capacidad de producirlo. Y el capitalismo, y sus nefastos resultados, sigue vigente. “El “capitalismo real” es el responsable de la mala organización ético-moral de la economía mundial y de la convivencia, vergonzosa, irracional y absurda en un mundo cada vez más integrado, de una indebida pobreza con una riqueza nunca vista”. Son palabras mayores del economista Luis de Sebastián, en un texto de 2005.

Hubo una encíclica de Juan Pablo II, la *Laborem Excercens*, que no hizo del capital el principio fundamental de la economía ni de la antropología, sino del trabajo, a través del cual el ser humano se humaniza. Ellacuría la analizó y la alabó. Y llegó a proponer como solución para nuestro mundo una *civilización del trabajo* versus una *civilización del capital* —lo que además lo concretó, social y antropológicamente, como una *civilización de la pobreza* versus una *civilización de la riqueza*.

Pero la intuición de Juan Pablo II no prosperó mucho, tampoco en la doctrina social de la

Iglesia, probablemente por su cierta afinidad al pensamiento de Marx en momentos en que Reagan estaba decidido a aplastar los intentos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Era demasiado fuerte cuestionar frontalmente al capitalismo. Pero sin ese ataque directo la doctrina social puede ser cooptada, y aquél puede vivir en buenas relaciones con la Iglesia. Ya lo había previsto Ellacuría. Decía que la doctrina social de la Iglesia se contentaba con atemperar los males del capitalismo, mientras que la teología de la liberación quería e intentaba humanizar el socialismo.

Conclusión. Es necesario defender en la Iglesia una doctrina social adecuada, denunciar el sistema capitalista e insistir en buscar otros modelos económicos distintos, sin que los economistas se contenten con analizar y comentar lo que ocurre dentro del capitalismo —lo que, de nuevo, Ellacuría promovió y exigió hasta su último discurso en Barcelona el 6 de noviembre de 1989.

3. Jesús de Nazaret

El tema es decisivo para la Iglesia, obviamente, pero también para los pueblos. Hace dos siglos no se tenía empacho en mencionar a “Dios”. No creo que debiéramos tenerlo ahora en mencionar a “Jesús de Nazaret”. Los cristianos, por supuesto, pero tampoco cualquier salvadoreño que recuerde cómo humanizó al país Monseñor Romero y tantas campesinas cristianas.

En otro escrito desarrollaremos el tema. Baste decir ahora, en vistas a Aparecida, que Jesús refuerza *la opción por la vida*, que es la opción por los pobres, pues eso es lo que él hizo. Refuerza *la crítica del capitalismo*, la denuncia profética que la llevó a cabo por defender al oprimido y luchar contra el opresor —que le crucificó. Refuerza *la búsqueda de soluciones eficaces y humanas*: “Denles de comer”. Y una cosa más. Jesús no sólo fue *palabra*, poderosa y verdadera, sino que fue también *praxis, gesto, acción*, en la que la palabra toma cuerpo. Y de eso la Iglesia está hoy bastante ayuna. Ojalá en Aparecida se revisen estas cosas.

Jon Sobrino

La “ruta crítica” de la salud

En los hospitales públicos de El Salvador, el panorama es el mismo. Paredes, puertas, ventanas, camas, baños, pasillos y hasta los instrumentos que se usan para atender a la gente, deprimen a cualquiera. En muchos casos, el personal que inicialmente trata al público —léase recepcionistas y enfermeras— tampoco se queda atrás; la desidia e indiferencia ante el sufrimiento que se pasea por esas instalaciones y las penetra, termina por hacer sentir a la persona enferma como la más desdichada del planeta. Regañan por no esperar en la cola, por hacerle más caso al dolor que a las indicaciones para “mantener el orden” o por no controlar los vómitos, los orines y las heces. No importa hablarle mal o hasta gritarle a niños, adultos o ancianos; todos se tragan igual esa “receta” inicial. Encima, cuando después de horas de espera atiendan a la víctima de todo lo anterior, algunos médicos la tratan como si tuvieran enfrente una máquina y no una persona. Por eso, casi siempre desaparece la imagen del doctor al estilo “Patch Adams” que ha vendido Hollywood y emerge la realidad que muestra a seres fríos y mecánicos.

Y los funcionarios de este ámbito, empezando por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social a la cabeza, no desentonan con la inoperancia. La epidemia actual de dengue, es tan recurrente porque igual de recurrente es la falta de medidas preventivas para evitarla. Y en eso, todo el gobierno tiene culpas que expiar, por falta de una visión integral para superar el mal. Su idea de prevenir consiste en echar bolsitas de abate a cuanta pila, barril o recipiente con agua se encuentren, llamar a la población a practicar la “untadita” o llenar de humo las casas durante las esporádicas campañas de fumigación. Eso no basta, señores. Es necesario mejorar el servicio de agua potable y facilitárselo a quienes no lo reciben; también hay que eliminar los promotorios de basura y ripio, pero sobre todo se debe superar la situación de pobreza de tantas familias. Pero mientras no se pueda evitar la enfermedad, no hace falta tener dos dedos de frente para decretar estado de emergencia al ver el repunte de personas

contagiadas. Pero sucede que siempre se espera a que comiencen las muertes y que se instale el descontrol, para encender la luz roja. Para colmo de males, pese a las constantes experiencias negativas, aún no se cuenta con suficientes camas ni personal para atender a la gente.

Todas esas deficiencias las experimentan quienes a diario acuden a los hospitales o unidades de salud con sus seres queridos enfermos. Eso le pasó a María Durán cuando llevó a su hija al Hospital Benjamín Bloom (HBB), después de que la niña había pasado tres días con fiebre alta y de haber sido examinada por un médico particular. Pese a que tenía las plaquetas en un nivel mucho más bajo del normal, no fue hospitalizada por falta de camas y porque quien la atendió consideró que no tenía “síntomas de alarma”. ¿A qué se refería? María lo supo de inmediato cuando agregó que si comenzaba a sangrar por la nariz, las encías, la orina o las heces, debía regresar rápido porque el dengue se habría convertido en hemorrágico. María quedó entonces, como dice la gente, “a la buena de Dios”. La niña podía mejorar... pero igual podía empeorar y morir. Todo porque en el hospital no podían atenderla.

María siguió las “atinadas” indicaciones, pero continuó llevándola a su niña al nosocomio para el control de las plaquetas. Ese fue otro calvario. Le pincharon su bracito muchas veces más que las que necesitó el zancudo para contagiarla. Las enfermeras no podían encontrarle una vena para extraerle sangre. Las sesiones de tortura con la jeringa ocurrieron en el anexo del HBB; luego debía ir al edificio central del mismo, cruzando la pasarela del bulevar Los Héroes, para que procesaran el examen. La respuesta tardaba entre dos y tres horas, tras la cual debía esperar de nuevo al médico para que la conociera. En total, María debía aguardar entre cuatro o cinco horas para conocer el nivel de plaquetas de su niña; nivel que, después de esa larga demora, podía haber variado para bien o para mal. Es ilógico e inaceptable que con la

emergencia enfrente, ese proceso vital para controlarla y salvar vidas no sea expedito.

Por eso indigna que la propaganda estatal insulte la inteligencia de la gente, pretendiendo que crea que tiene un “gobierno con sentido humano” y que éste convertirá a El Salvador en un país “unido” y con “sentido”. Será el sentido pésame en todo caso, porque acá la muerte se pasea campante llevándose a las personas de cualquier forma y a cualquier hora. Esas frases tan trilladas y martilladas no se corresponden con la realidad. Si así fuera, las autoridades de salud no estuviesen discutiendo aún si las dos niñas que fallecieron el once y doce de agosto padecían o no la enfermedad, o si los casos del 2006 son más o son menos que hace dos años; tampoco se “lavarían las manos” culpando a la gente por no hacer caso a las medidas preventivas. Por el contrario, estarían buscando cómo mejorar la calidad de la atención y frenar el incremento de víctimas.

Por su incompetencia, la población le rehuye al sistema público de salud y prefiere hacer un sacrificio extra pagando un médico privado. Pero nadie puede afirmar que al cancelar el alto costo de la atención médica particular, obtendrá un mejor servicio. Con lo que puede encontrarse, aunque no siempre, es con un vulgar negocio donde la prioridad es fijarle al paciente más de una consulta y dejarle varios exámenes para asegurarse más ganancias. Además, la persona tendrá que pagar las medicinas, que casi siempre están fuera de su alcance y que a veces son innecesarias porque el médico se equivocó en el dictamen.

María también pasó por esa experiencia. Antes de ir al HBB, fue a un consultorio de esos. Ahí le diagnosticaron a la niña infección en las vías urinarias y le recetaron antibióticos, cuyo uso le agravó la enfermedad y pudo causarle hasta la muerte si se los hubieran seguido administrando. El médico que la atendió también le pidió exámenes de sangre y orina. Pese a que el resultado de este último análisis fue negativo, en la segunda cita —pagada también, obviamente— le duplicó la dosis de antibióticos. Fue entonces cuando una doctora de la unidad de salud la vio y sospechó que era dengue; sin embargo, María ya había gastado alrededor de

cientos dólares en consultas y medicinas. El cuestionado galeno privado le terminó diciendo que estaba atacando fuerte una bacteria desconocida y que en seis días había muerto una niña por esa causa. ¡Qué derroche de profesionalismo y, sobre todo, delicadeza!

Está claro que la desconfianza en el sistema nacional de salud vuelve más rentable la atención privada. La gente prefiere hacer un esfuerzo extra creyendo que es mejor y —aunque no siempre, como ya se apuntó— terminan en manos de comerciantes como el citado. Hay también una gran mayoría que, aunque quiera, no puede pagar su excesivo precio y debe acudir a los hospitales públicos.

Ante todo lo anterior, urge un cambio radical. Es necesario, de una vez por todas, que se elabore y ejecute la ya famosa “Reforma Integral del Sistema de Salud”. Se conoce el ofrecimiento del presidente Antonio Saca y los anuncios oficiales de su existencia; también existen propuestas de gremiales como el Colegio Médico u otras organizaciones de la sociedad. El caso es que se debe discutir e impulsar pensando en el bien común; no en intereses particulares y mezquinos.

La salud de la población no es un juego. Debe asumirse como una prioridad y el gobierno debe disponer de todos sus recursos para preservarla. En tal sentido, el Ministerio de Educación debe desarrollar en el alumnado la conciencia preventiva que las autoridades reclaman de la población; el de Medio Ambiente debe controlar los contaminantes que causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de otro tipo; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) debe facilitar el agua potable necesaria para la higiene; y las alcaldías deben mejorar el servicio de recolección de desechos. Mientras no se tomen estas medidas y el servicio de salud sólo llame la atención de los gobernantes cuando hay alertas rojas, las enfermedades seguirán golpeando a una población que ya tiene suficiente con las víctimas de la inseguridad, la violencia y la pobreza. Por eso, la gente debe pasar de la indignación a la acción para plantarle en la cara a quienes conducen mal el país un mayúsculo ¡Basta ya!